

## Nunca más: la marea, el dique y el búnquer

Víctor Sampedro Blanco <sup>[1]</sup>

El 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige lanzaba su mensaje de socorro frente de Fisterra, originando un ciclo de movilización sin precedentes, que activaría las protestas contra la ocupación de Iraq. Ambos temas se solaparon, pero apenas tuvieron consecuencias en las elecciones de marzo de 2003. En este ensayo propongo tres reflexiones. Primero, inscribir las multitudinarias protestas como reacción a las crisis de gobernabilidad de la globalización capitalista. Segundo, desvelar los procesos de desactivación electoral de dichos temas. Y, tercero, detallar las estrategias de blindaje gubernamental en la esfera pública.

La urgencia de estas cuestiones resulta obvia. La ciudadanía se manifestó contra los riesgos del tráfico global de hidrocarburos y la guerra del petróleo que se avecinaba, experimentándolas como dos crisis de gobernabilidad derivadas de un mismo modelo de «desarrollo». En cambio, no tuvieron el impacto esperado en las elecciones municipales y autonómicas, que apenas comportaron el retroceso del Partido Popular. Más allá de las limitaciones de la democracia representativa y del estado nacional para gestionar los riesgos globales, la desconexión entre la calle y las urnas denota el legado antidemocrático de la esfera pública española. Los responsables del mayor ecocidio y la ruptura más grave del orden internacional no han obtenido sanción política; es más, se perfilan como ganadores de las siguientes elecciones. Escribo este texto a medio camino del análisis académico y mi involucración personal en un semestre de protestas que ahora parece desactivado.

### Crisis de gobernabilidad global y marea humana

Más de medio millón de voluntarios acudieron a las costas a (intentar) limpiar chapapote.<sup>[2]</sup> Los cientos de miles de manifestantes convocados por Nunca Más se solaparon con los millones de personas que se expresaron contra la guerra.<sup>[3]</sup> Tal volumen de acción colectiva responde a que la ciudadanía constataba la impotencia institucional para gestionar los riesgos que conlleva el capitalismo globalizado. La población gallega veía amenazada la viabilidad económica de la pesca de bajura. Un sector productivo en declive, pero clave para la economía regional, estaba desprotegido, como corresponde a las reglas de darwinismo económico. Los responsables institucionales se habían ido de cacería, mientras el Prestige seguía un rumbo errático. No existían medios para remolcar el buque, ni puerto de abrigo donde trasvasar la carga. La demora en el salvamento se debió a presuntas negociaciones al alza con las compañías subcontratadas para el remolque. Los responsables directos no aplicaron el Plan Nacional de Contingencias (previsto desde 1993 y en vigor desde 2001; pero, en realidad, ficticio).

El Prestige fue una tragedia anunciada, cuyo cumplimiento no obedecía a la improvisación o al azar, sino a la dejación premeditada. Con casi la misma periodicidad que el Jubileo, se han hundido o accidentado buques con cargas

tóxicas en las costas gallegas. Pero los fondos públicos destinados al Camino de Santiago no se aplicaron nunca al corredor marítimo de A Costa da Morte. El nulo desarrollo de la legislación de salvamento marítimo permitió a la Xunta y a los ministerios de

más 11.000 voluntarios en navidad. Estas cifras sumadas a las de otros puntos de la costa del Cantábrico, alcanzan con creces el medio millón de voluntarios. Tres gráficos de informes secretos del Ministerio de Defensa muestran la abrumadora presencia del voluntariado (20.000) hasta el día 9 de diciembre. En cada uno de los fines de semana de ese mes se contabilizan, al menos, 15.000 voluntarios. Superaron a las FAS y al personal contratado durante todo el mes de enero y su presencia fue mayoritaria sólo en los fines de semana de febrero.

Fomento y Medio Ambiente escamotear sus responsabilidades. Los organismos competentes (el Centro de Coordinación Operativa de la Xunta y el Centro de Operaciones Marítimas de Fisterra) ni siquiera habían sido creados. Tampoco existía un solo buque o barrera anticontaminación en Galicia. En consecuencia, la «ges-tión» de la crisis consistió en declinar responsabilidades y negar la realidad.

Pero la llegada masiva de chapapote revelaba que el Estado era incapaz de controlar el tráfico global de hidrocarburos, y que éste estaba más próximo a la piratería que a una actividad legal. Casi doce banderas de conveniencia aseguraban la impunidad de otras tantas empresas fantasma. Los riesgos inmediatos de una economía basada en la precariedad laboral estaban asignados a la tripulación surasiática y al capitán griego, a punto de jubilarse y hasta el momento el único implicado que ha estado en prisión. Ni rastro del propietario libio del buque, ni de la compañía de fletes griega, ni de la aseguradora británica que lo abanderó en las Bahamas, ni de la firma gibraltareña que fletaba la carga, que pertenecía a una petrolera rusosuíza...<sup>[4]</sup> En suma, 2.600 kilómetros de costa (1.000 de ellos en Francia) se vieron afectados por un vertido que, con el resto de mareas negras, suma el 10% de contaminación de hidrocarburos en todo el planeta. Cerca del 70% se produce por la limpieza de los tanques en alta mar, para ahorrar costes. Una práctica que se incrementó aprovechando el hundimiento del Prestige.<sup>[5]</sup> La única decisión de las autoridades fue mandar el buque «al quinto pino», donde la impunidad jurídica fuese total. Francia y Portugal impidieron, incluso con buques de guerra, que el buque siniestrado se acercase a sus costas. Durante una semana el deambular del buque extendió el vertido.

La jibarización del Estado y la alegaldad (o pura ilegalidad) de la economía del petróleo sumieron a la población en la indefensión. El Prestige recorrió más de 1.300 kms antes de hundirse, 63.000 toneladas de fuel se dispersaron sobre un millón de kilómetros cuadrados de mar; el doble de la superficie del Estado español, según el centro francés Le Cedre. A la ausencia de recursos públicos para paliar la tragedia se sumó la red clientelar de las subcontratas encargadas de combatir la contaminación, muchas propiedad de cargos institucionales. Además de las compañías de remolcadores, destaca la empresa Tragsa, uno de cuyos accionistas era el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Tragsa logró capitalizarse gracias a los fondos para la limpieza de la costa y fue

denunciada por su escasa operatividad, la arbitraria asignación de los jornales y los equipamientos.

Un hecho revela el erróneo concepto de seguridad nacional manejado por la clase política. Los soldados no fueron movilizados para evitar la sensación de emergencia nacional, en consonancia con la estrategia de negar la catástrofe. Se buscó, en cambio, la actuación internacional de las tropas como cortina de humo. De ahí el despliegue de la Marina española en el Índico, asaltando un barco coreano que transportaba armamento «terrorista». Al día siguiente, se reconocía el error y la carga era devuelta a su propietario, el gobierno «amigo» de Yemen. Lo importante, a efectos mediáticos era que, sin haberse pasado por las costas gallegas, el Ministerio de Defensa afirmó haber «asestado un golpe» a Al Qaeda. Mientras, varios militares belgas, llegados a A Costa da Morte la primera semana, volvieron a su país cansados de esperar a un mando español que los coordinase. Hasta pasadas tres semanas no hicieron su aparición los efectivos de las FAS, empeñadas en llevar la Guerra contra el Terrorismo a Iraq.

Este ecocidio seguía las lógicas de la globalización capitalista. Una trama fraudulenta de empresas transnacionales contaminaba con total impunidad. La trama paralela de las subcontratas privadas blindaba a los responsables políticos, además de enriquecer a sus camarillas. ¿Puede hablarse, entonces, de las movilizaciones como muestra del movimiento antiglobalización? La respuesta ha de matizarse. El único argumento internacional esgrimido por el gobierno fue autoexculpatorio o revertido en clave patriótica. Nada podía hacerse frente a la inexistente regulación de la Unión Europea y la nacionalidad británica de la aseguradora del buque sirvió para reclamar la españolidad de Gibraltar. La oposición parlamentaria, centrada como veremos en el desgaste del PP, apenas esbozó argumentos altermundistas. Y, sin embargo, no era preciso leer a Ulrich Beck para percibir los riesgos de la globalización y la privatización del Estado. Tampoco era necesario desafiar a Huntington para afirmar que el choque de civilizaciones y la guerra contra el terrorismo funcionan con y por petróleo. La hipótesis que avanzo, a la espera de estudios empíricos que la desmientan, es que la gente se movilizó por sentido co-mún, en defensa de su derecho a la supervivencia, al medio ambiente y la salud.

El papel del «movimiento de movimientos» necesita evaluarse con cuidado. Mariñeiros, mariscadoras, redeiras y voluntarios tejieron una red espontánea de solidaridad. La Xunta contabiliza más de 330.000 jornadas de trabajo de los voluntarios, casi las mismas que las del personal contratado.<sup>[6]</sup> Sin embargo, no fue hasta febrero cuando se crearon la Dirección General del Voluntariado (conocida por su labor de disuasión y entorpecimiento) y la Fundación Arao (presidida por un sobrino de Manuel Fraga y encargada de recibir donativos privados). La respuesta provino de la sociedad civil, autoorganizada en las plataformas Nunca Más y los grupos de voluntarios, en la península y en Europa. Así lo reconoce, al menos, la opinión pública gallega que valora a Nunca Más muy por encima de las instituciones y reconoce a los voluntarios como quienes realmente limpiaron las playas.<sup>[7]</sup>

Nunca Más de Galiza [NM, de aquí en adelante] agrupa a más de doscientas asociaciones ecologistas, centrales sindicales, colectivos vecinales, políticos y

cul-turales; además de las cofradías marineras. El lema provenía de las movilizaciones contra el Mar Egeo, el penúltimo petrolero hundido en las costas gallegas. «Nunca más» fue también la consigna de la comisión instaurada en Brasil para juzgar los crímenes de la dictadura. El potencial de regeneración democrática de la plata-forma gallega se demuestra al tener como proyecto central en los próximos meses la constitución de una Comisión de la Verdad que investigue a fondo las responsabilidades no saldadas. La composición de NM revela que atravesó las fronteras sociológicas del campo y la ciudad, filiaciones políticas (incluso miembros del PP participaron en un comienzo), rompiendo barreras generacionales y sectores profesionales (con sus colectivos de educación —Area Negra—, profesionales del Derecho —Xustiza Negra—, las artes —Burla Negra —...). Es simplista, por tanto, la imagen de NM como movimiento urbano, antítesis de la Galicia «profunda».

NM adelantaba algunos rasgos que se reproducirían en las manifestaciones contra la guerra. Las protestas fueron convocadas por los artistas de Burla Negra y sus actividades carecieron de liderazgo político. El ciclo de protesta arrancó con los voluntarios y las plataformas NM surgidas en lugares remotos. Tuvo su clímax en la primera manifestación antibelicista celebrada simultáneamente en todo el mundo y que alcanzó la máxima asistencia registrada hasta entonces. El 15 de febrero los foros sociales del movimiento antiglobalización tomaron cuerpo en todo el mundo. La prensa norteamericana denominaba a los manifestantes como «la opinión pública internacional».<sup>[8]</sup> Una semana más tarde, NM, coincidiendo con el aniversario del 23F, convocaba en Madrid otra manifestación, también sin precedentes.

Los rasgos comunes entre estas protestas y el altermundismo son varios: rechazo ante la instrumentación partidista, recursos ante los medios de comunicación, nuevos repertorios de acción simbólica y una capacidad de movilización que supera con creces a la de los grupos convocantes. Las reivindicaciones políticas fueron básicas, rebasando el encuadramiento en unas siglas partidarias: Dimisión de los gobernantes, por sus decisiones políticas contrarias a la opinión pública y a los intereses de la ciudadanía. Por su impotencia, también, para gestionar los riesgos medioambientales y para evitar la guerra. Políticas públicas de prevención de riesgos, o que al menos no los aumentasen. Instancias de fiscalización y sanción jurídico-legal, exentas de veto gubernativo. Las demandas, en suma, señalaban implícitamente la necesidad de gobernar la globalización, contando con una sociedad civil transnacional que reivindicaba mayor protagonismo.

La debilidad y la miopía política de los colectivos antiglobalización hicieron imposible inscribir las movilizaciones en un discurso político radical. Y ello a pesar de que numerosos altermundistas participaron en el voluntariado y en las protestas. El nivel de movilización sería inexplicable sin el precedente de «los seis meses de lucha» de la presidencia española de la UE en 2002. Pero fueron personajes anónimos y públicos, sin filiación política ni excesiva carga ideológica, quienes comenzaron a luchar contra el chapapote y a convocar a la ciudadanía. El nivel de acción colectiva se disparó con dos dinámicas. El efecto demostración de los voluntarios y marineros, ante la parálisis y la mentira oficiales, elevó el nivel de indignación. Los ciudadanos acudieron a las costas para «hacer algo» y «vivir una experiencia», fundiendo lo sociopolítico y lo

personal. Sería tan absurdo que la antiglobalización se arrogara la marea de voluntarios y manifestantes (cosa que no ocurrió), como las etiquetas de «porreros» y «bataunos», empleadas por algún cargo del PP. Minimizar el compromiso de los voluntarios como «turismo revolucionario», otro cliché extendido, resulta un sarcasmo, aplicado a quienes recogieron fuel en pleno invierno, sin equipos ni protección sanitaria, sufriendo cefaleas y catarros.

El nivel de indignación crecía, mientras los «artistas» rebajaban el segundo motor movilizador: el umbral de «ridículo» que paraliza la expresión de la protesta. La convocatoria se extendió entre sectores no organizados ideológica o socialmente. Si los intelectuales y los famosos se echaban a las playas y a la calle, disfrazados o vestidos con el mono blanco, ¿cómo quedarse en casa? Creo que el espontaneísmo y la espectacularización mediáticas dan cuenta de la extensión de la protesta. Por otra parte, la escasa capacidad del movimiento antiglobalización (y de los partidos) para politizar estas crisis explicaría su evanescencia en las urnas y en el tiempo. De igual forma que la oposición política no logró rentabilidad electoral, la antiglobalización apenas consolidó las redes de activistas.

El altermundismo, sin embargo, ha demostrado haber popularizado su forma de (des)organización y su discurso. La ciudadanía se autoconvocó y coordinó en grupos de afinidad, mediante las nuevas tecnologías de la comunicación y por la visibilidad mediática de algunos portavoces. 50.000 adolescentes convocados por Nunca Más se abrazaron en A Costa da Morte para clamar que Otro mundo é posible. Esto supone que unos 100.000 padres dieron por escrito su permiso. Se trataba de una llamada de urgencia y socorro. No era un deseo utópico, sino puro posibilismo; entendido como búsqueda de alternativas políticas factibles y no como imposición de la única política que se presenta como posible. Era también una expresión de radicalidad, de denuncia de la crisis desde sus raíces. Pero los grupos antiglobalización desaprovecharon una oportunidad inmejorable para acometer su mayor reto: ligar la agenda global a cuestiones y temas locales.<sup>[9]</sup> Por su parte, la clase política, por activa o por pasiva, desactivó electoralmente el Prestige y la guerra de Iraq.

### **El dique de las urnas**

Antes de detallar el escaso impacto de las movilizaciones en las urnas, necesitamos precisar el balance electoral del 25 de mayo. Las listas de izquierdas lograron más votos que el PP; también en Galicia, donde la derecha no perdía unas elecciones desde la década de 1930. En caso de haberse celebrado unas elecciones autonómicas, con el mismo voto que el emitido en las municipales gallegas, el PSOE y el BNG juntos superarían en 3 escaños al PP; frente a la ventaja de 7 escaños de este partido en el Parlamento actual de Galicia.<sup>[10]</sup> Este vuelco no es conocido por la ciudadanía. No sólo el gobierno evitó dar este mensaje, sino también la oposición, enfrentada en una pugna interna. Las desavenencias, acentuadas en el fracaso de los pactos postelectorales en Vigo y transfuguismos varios (Sada...), acabarían por desdibujar la única coalición (PSdG y BNG) capaz de presentar una alternativa de gobierno al PP.

De todos modos, resulta difícil de entender que quienes se manifestaron contra el gobierno en las calles no lo hubieran hecho con la misma

contundencia en las urnas (y no sólo en Galicia; baste el ejemplo de la mayoría absoluta del exministro Jaume Matas en Baleares). Tomar la voz y expresarse con el cuerpo conlleva más costes y riesgos que emitir un voto; más aún, con los recortes de los derechos de expresión que luego detallaremos. Sólo se me ocurre la hipótesis de la desconexión de la campaña electoral con los problemas que afrontaba el país. La versión dominante señala que el Prestige y la guerra eran temas demasiado alejados de las preocupaciones reales de la ciudadanía. Esta, sin embargo, no debió de verlo así, cuando acudió a recoger veneno con las manos. Más bien, las urnas evidenciaron la incapacidad del tejido social para innovar las agendas políticas y la impermeabilidad de estas últimas respecto a los sectores sociales más activos y, sin embargo, desmovilizados electoralmente.

En la campaña, la oposición se centró en la pugna de votos, pero no atrajo a los jóvenes ni recuperó el electorado crítico que perdió en 1996 y que se recluyó en la abstención en 2000.<sup>[11]</sup> El gobierno, en cambio, movilizó como nunca a su electorado más fiel, presentándose como víctima de un plan desleal de acoso y derribo. La oposición, con excepciones individuales, pecó de cortoplacismo centrándose en la carrera electoral. Los primeros intentos de crear una comisión de investigación en el Parlamento Europeo no prosperaron por la ausencia de varios eurodiputados españoles, que estaban haciendo campaña en las elecciones municipales. El nacionalismo quiso capitalizar la indignación del electorado gallego y no cedió suficiente protagonismo a la sociedad civil española y extranjera.<sup>[12]</sup> El PSOE basculó entre las adhesiones de sus líderes a Nunca Más y las críticas del alcalde de A Coruña a la plataforma ciudadana, según él, «dirigida por radicales e independentistas» (1312003). Repetía las declaraciones de Mayor Oreja el día anterior: «En el país vasco estamos padeciendo las consecuencias de grupos como Nunca Más. Lo que el País Vasco está padeciendo es la batasunización de la sociedad por parte de ETA. La estrategia de ETA siempre ha sido crear estructuras sociales que, sin llamarse ETA, estaban al servicio de ETA».

El PSOE y el PSdG jugaron con ambigüedad. Fuera de Galicia sus cargos se su-maban a «título individual» y sus organizaciones de votantes intentaban cooptar las plataformas provinciales. Sin embargo, desde el ayuntamiento de A Coruña se anunció el Plan Galicia de ayudas oficiales. El PSOE respondía que «eran cosas de Paco Vázquez». Y antes de un año del hundimiento del Prestige, el gobierno imponía al alcalde coruñés la Orden de Isabel la Católica: «por su sentido de estado». Los votos de una comarca pesaron más que la devastación del ecosistema. Aunque tampoco se le dio importancia a que Vázquez consiguió sus peores resultados.

Por apenas 500 votos no tuvo que cumplir su «amenaza» de renunciar a la alcaldía si no lograba mayoría absoluta.

Los alcaldes de la oposición demostraron su «sentido de estado» impidiendo que el buque entrase en «sus» puertos. Ninguno se ofreció a guarecer el Prestige para trasvasar la carga. Es la única solución contemplada en los protocolos oficiales para estos accidentes. Pero se prefirió, según el conselleiro de Pesca, «repartir entre todos un poco del vertido» (11112003). En realidad, un perímetro de entre 30 y 40 Km. de la costa gallega está asfaltado

(aunque no se vea) y desde hace un año llega fuel. No deja de ser una paradoja que Francisco Vázquez haya sido elegido después presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Se seguían así concediendo honores públicos, concebidos como prebendas (y afrentas a la población), a los responsables directos del ecocidio. El 25 de julio, día de la Patria Galega, el Ministro de Fomento (que ordenó enviar el buque «al quinto pino» e hizo firmar a la compañía de salvamento que cumpliría esta orden antes de hacer-se cargo del Prestige) había recibido la Medalla de Galicia de manos de Manuel Fraga.

En la gestión de la crisis ni siquiera se sopesaron cuestiones de salud pública. «En los pueblos saben que hemos hecho todo lo que hemos podido y que hemos puesto el dinero encima de la mesa».<sup>[13]</sup> Estas declaraciones de Manuel Fraga revelan la principal estrategia electoral del PP gallego y la mayor trampa para la oposición. Con el «dinero encima» de algunas mesas se aseguraba el voto de los sectores económicos más afectados. A la oposición sólo le quedaba compartir el protagonismo en la entrega de las ayudas, como hizo el alcalde de A Coruña. La otra alternativa era denunciar las ficciones contables del Plan Galicia y exigir más ayudas. Algo que, de enfatizarse en exceso, podría despertar «agravios comparativos» con otras autonomías en liza electoral. En todo caso, se juzgó como suicida «dañar» a los sectores indemnizados, aunque éstos tengan comprometido su futuro, como indican los planes de reducir la flota gallega en un 40%.<sup>[14]</sup>

El cortoplacismo electoral hizo que la oposición colaborase con el gobierno en su principal estrategia: negar la realidad. Los datos de las organizaciones ecologistas son contundentes: «Resulta ilustrativo comparar el período de cierre [de las actividades en el mar] en Galicia con los establecidos en otras mareas negras como la del Braer (1993), en las islas Shetland. Tras este accidente, la captura de crustáceos (exceptuando la cigala) se abrió a los 22 meses, la de moluscos (exceptuando la del mejillón) a los 25 meses, y la de la cigala y mejillón a los 7 años; en el caso del Erika, en la Bretaña francesa (1999) el cierre se prolongó entre 2 y 18 meses».<sup>[15]</sup> Y, encima, la degradación lenta del vertido del Prestige, viscoso e insoluble, prolonga su contaminación más que en esos casos precedentes. Durante la campaña resultó imposible filtrar los estudios publicados después: hidrocarburos cancerígenos pasaron a la cadena alimenticia cuando se levantaba la veda.<sup>[16]</sup> También ahora se sabe que las ayudas eran, en realidad, el pan de los cargos municipales y el hambre para mañana de un sector amordazado. Las capturas se han reducido entre un 30% y un 50%, algunas especies han casi desaparecido o reducido su tamaño y se duda de la capacidad de regeneración de otras. Aceptar las indemnizaciones que tramita la Xunta supone la renuncia expresa a realizar reclamaciones posteriores. El futuro de A Costa da Morte se presenta bastante negro, teniendo en cuenta que los efectos reales se conocerán, al menos, tras una década.

Resulta difícil entender cómo la oposición no derrotó a unos gobernantes que demostraron niveles de indolencia y prepotencia difíciles de igualar. Se equivocaron quienes acusaban al PP de incompetentes, porque los fondos destinados a la seguridad marítima habían sido reducidos con la aquiescencia de la oposición. Primó la indolencia, la falta de sensibilidad, la dejación de

responsabilidades ante los riesgos que amenazaban a un sector improductivo. Tras el regreso de la cacería que le ocupó el fin de semana que se remolcaba el Prestige, Manuel Fraga argumentó que «No hay mal que por bien no venga». El «bien» eran las ayudas mordaza y una inversión propia del desarrollismo tardofranquista: multinacionales de la acuicultura, carreteras (más asfalto) y un Parador de Turismo en A Costa da Morte, que todos los alcaldes populares prometieron construir, pero cuya existencia es tan fantasmal como la del puerto de abrigo coruñés o las líneas férreas de alta velocidad del Plan Galicia.

La oposición no denunció el desvío de fondos públicos para comprar votos y beneficiar a las subcontratas ligadas al gobierno. Se impuso la lógica electoral y se recompuso el ecosistema caciquil. En esta tarea, el PP dispuso de más resortes y mostró mayor cohesión que la izquierda. Esta pidió dimisiones, escondió su parte de responsabilidad e intentó acaparar visibilidad en la entrega de más ayudas. Cuestiones estructurales, pero de impacto cotidiano, como la reconversión de la pesca de bajura o la regeneración medioambiental, así como la salud pública se desterraron de la campaña electoral. Culpar a los votantes gallegos de venderse en masa implica desconocer los resultados electorales, y otras dos realidades. Rechazar las ayudas suponía, en muchos casos, marchar a Canarias; no de veraneo, sino a las cuadrillas de la construcción que reclutan jóvenes de A Costa da Morte. Y que el PP avanzó en otros municipios y autonomías del Estado (por ejemplo, en la segunda vuelta de las autonómicas madrileñas).

Antes de juzgar a la ciudadanía, debíamos atender al abanico de opciones electorales (y vitales) que se le presentaban. He intentado señalar las limitaciones impuestas por el juego electoral y resulta obvio que las alternativas de la oposición (como en el tema de la guerra) eran contradictorias o inexistentes. Otro mundo sería posible, pero con otra forma de hacer política. Si no existe, ¿por qué correr el riesgo que siempre comporta un cambio de gobierno? Más aun, si la decisión se toma desde la precariedad.

Dos discursos antagónicos han calado sobre las movilizaciones de NM. «Los perros que ladran su resentimiento en las esquinas» (J.M. Aznar) y los gallegos que comen de la mano que les golpea. La primera imagen cundió entre los sectores más conservadores; la segunda, entre supuestos «progresistas». Esta última, es la imagen xenofóbica del gallego cobarde, falso, interesado, que subirá o bajará de la escalera según lo que le ofrezcan. También bebe del autoodio y la insistencia flagelante de la cantinela: «mean por encima de nosotros y decimos que llueve». El resentimiento de NM era, en todo caso, el del grupo Os Resentidos, cuya estrofa de «menos mal que nos queda Portugal» se coreaba en las manifestaciones. Unas movilizaciones que, con todos sus límites, visibilizaron a una sociedad civil que, ante la sorpresa de sus supuestos portavoces, denunciaba el legado tardofranquista que le atenazaba.

NM, en todo caso, sería responsable de dos fallos estratégicos. El primero, enfrentarse al PP gallego, sin aprovechar las fisuras que se abrieron en su seno y sin extender la crítica a la oposición que sólo peleó por «su» electorado. La primera petición de la plataforma fue que dimitieran los cargos del gobierno. Se debió de exigir, en cambio, la inhabilitación de todos los cargos políticos y administrativos cuya actuación quedó en evidencia. El segundo error sería no



reconocer en toda su importancia el papel del voluntariado, cuyo apoyo habría mantenido en el tiempo y extendido geográficamente las reivindicaciones de la plataforma. En la mani-festación del 23F en Madrid, el representante de los voluntarios habló en último lugar y apenas se le concedió tiempo. Por último, la paralización de las convocato-rias durante la campaña electoral prueba una contradicción de base: que no era un juguete en manos del BNG, pero que tampoco tenía recursos ni un discurso radical (de raíz) para lograr que el Prestige focalizase las elecciones. Estas críticas debieran ser presentadas en un marco de reflexión más amplio.

### **El búnker en la esfera pública**

La crisis del Prestige no tuvo los efectos políticos esperados porque en la esfera pública se desarrollaron procesos de claro perfil antidemocrático. Los barómetros del CIS señalan que el Prestige y la guerra, temas prioritarios a la altura de enero y febrero, perdieron importancia en la agenda de problemas del país antes de las elecciones. Las recetas que proveen los expertos en comunicación de crisis se co-cinaron en una dieta de desinformación impresionante. Se cercenaron las fuentes institucionales que podrían fiscalizar al poder Ejecutivo y alimentar el flujo de noticias de los medios convencionales. Se mintió recurriendo a campañas autopromocionales y de criminalización de la disidencia. Un auténtico búnker parecía blindar a los gobernantes que emplearon sus resortes en una esfera públi-ca supuestamente democrática. El «retiro digno» que solicitaba Manuel Fraga para poner fin a su vida política fueron las trincheras fortificadas que negaron la separación de poderes y la libertad de expresión. Los frentes de la batalla fueron las cámaras parlamentarias, los tribunales de justicia, las comunidades científicas, los medios de comunicación y la misma sociedad civil.

Los parlamentos de Estrasburgo, Santiago de Compostela y Madrid fueron bloqueados. Ya he mencionado que la ausencia de siete diputados socialistas impidió materializar el primer intento de constituir una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. La búsqueda de voto local pesaba más que la gobernanza global. Y han sido necesarios cinco intentos posteriores, con el impulso de NM y de la ONG Voluntarios sin Fronteras, para constituir una comisión europea bas-tante limitada: está sujeta al veto del Grupo Liberal y estudiará conjuntamente las tragedias del Prestige y el Erika. El Parlamento de Galicia demostró su inanidad ante la negativa de los responsables del Ejecutivo central a comparecer ante él. Y las Cortes Españolas aplicaron el rodillo de la mayoría popular para abortar cual-quier comisión en su seno.

El primer contragolpe a la oposición socialista fue la exigencia de la dimisión de su portavoz en el Congreso, por «manipular» un informe oficial que el propio gobierno le había entregado. Sumado esto al Consejo de ministros en el ayuntamiento de A Coruña, el Prestige quedó desactivado como posible activo electoral del PSOE. A partir de entonces, el respaldo explícito a NM suponía la legitimación implícita del fantasma nacionalista esgrimido por el PP. Como síntoma del nivel de democracia parlamentaria española, baste señalar que las únicas comparecencias de algunas autoridades se produjeron ante la comisión que el Parlamento francés abrió por la llegada de fuel a las Landas. Como prueba de la democracia interna de los partidos, el PP zanjó en enero una

crisis interna, con la destitución de José Cuiña, conselleiro de Política Territorial. Hasta ese momento era el delfín de Fraga, el mayor opositor a Rajoy y partidario de que la Xunta se uniese a NM.

El cierre del frente político dejó los tribunales como la única arena institucional donde exigir responsabilidades. La inexistencia de los organismos encargados de gestionar los accidentes marítimos permitió que la Xunta y los Ministerios de Madrid eludiesen toda responsabilidad y remitiesen las imputaciones a cargos individuales, cuya actuación no constaba por escrito. El Ministerio de Fomento declaró que «todas las órdenes de alejamiento del buque» habían sido orales. Era, por tanto, inviable aplicar al gobierno el Derecho Administrativo. Un año más tarde, sólo estaban imputados por los tribunales de justicia españoles el capitán del Prestige (que hubo de pagar una fianza millonaria para ser puesto en libertad, sin abandonar España) y el director general de la Marina Mercante.

Las comisiones internas «de investigación», abiertas por las instituciones, no han dado a conocer sus informes. Sus consecuencias han sido el ascenso personal de los cargos públicos o de sus familiares. El hermano del subsecretario de Fomento es ahora director de la oficina del Comisionado del gobierno. El conselleiro de Medio Ambiente es el actual presidente del Patronato del Parque Nacional das Illas Atlánticas. El funcionario de la Capitanía Marítima de A Coruña (que se otorga el mérito de haber encendido los motores del barco para alejarlo) fue nombrado capitán con la jubilación ya cercana...<sup>[17]</sup> La vía judicial continúa con los procesos abiertos por las indemnizaciones. Como ya señalé, el gobierno, por Real Decreto, promete pagar el 100% de las pérdidas (computadas hasta abril), a cambio de renunciar a sus derechos de reclamación. Es decir, se intenta dar el carpetazo final, antes de que se conozcan los verdaderos efectos de la catástrofe; de nuevo, sin explicar el origen de esos fondos. Sin embargo, los políticos españoles están encausados en los tribunales extranjeros. El Ministerio de Fomento ha sido imputado por violar su propio Plan de Salvamento en un tribunal estadounidense.<sup>[18]</sup> Por el mismo motivo afronta otra demanda judicial, presentada en Francia por la diputación provincial de Vendée. Una vez más, los cargos públicos españoles comparecerán ante organismos extranjeros. Supondrá mayor desembolso para su defensa y que dichos procesos tengan una visibilidad mínima en los medios españoles.

Eliminados los políticos y los jueces como fuentes burocráticas que permiten elaborar rutinariamente la información, los medios contaban sólo con los expertos. El frente científico fue gestionado por los mismos encargados de difuminar otra crisis propia de la globalización: la encefalopatía espongiiforme. El ministro Rajoy adoptó de nuevo la estrategia empleada con «las vacas locas»; antes ensayada en Doñana. Designó un reducido grupo de «expertos» y «técnicos» que monopolizaba la información. Poco importó denunciar que la comunidad científica nunca fue consultada antes de alejar el buque, que los informes presentados eran traducciones de los elaborados sobre el Erika o que no existía ningún informe de la solidificación del fuel. Su publicación, en cambio, respondía a la necesidad de excusar a los gobernantes. Mariano Rajoy declaraba en el «aniversario» anual del hundimiento del Prestige: «No volvería a hablar de los hilillos, pero yo leí el informe que me dieron».<sup>[19]</sup>

Los técnicos del Nautilo, el batiscafo contratado para reparar el pecio del buque, trabajaron al dictado gubernamental con informes confidenciales y exclusivos. El flujo de fuentes autorizadas fue, así, canalizado en un embudo. 400 investigadores españoles publicaron en la revista Science una carta de protesta por la marginación de la comunidad científica. Pero las presiones sobre los grupos universitarios y los centros científicos censuraron el flujo de información. Los datos que se publicaron un año más tarde siguen procediendo del Cedre francés y del Instituto Hidrográfico de Portugal. El Instituto Oceanográfico Español apenas informaba sobre la contaminación y, aun así, sus informes más comprometedores fueron retirados de su página web. Los institutos de A Coruña y Vigo apenas emitieron un solo trabajo crítico con el gobierno. La deriva de recursos públicos para el blindaje del gobierno continúa en la actualidad, amenazando la posibilidad de alcanzar un conocimiento real de la catástrofe. Las ayudas a la investigación se han repartido entre todos los grupos solicitantes, impidiendo así la posibilidad de formar equipos adecuados a la dimensión del objeto de estudio. El seguimiento de la salud de los voluntarios y afectados por el fuel es prácticamente inexistente...

Continúa, por tanto, la censura científica con la misma cerrazón que durante el período electoral. En la última semana de campaña resultó imposible publicar tres informes «confidenciales» que desvelaban los riesgos para la salud que comportaba la «normalización» de la situación.<sup>[20]</sup> Resulta interesante apuntar cuándo y cómo «conoció» la opinión pública estos informes, porque ilustra el uso gubernamental de las «exclusivas» periodísticas sobre cuestiones técnicas. El 12 de noviembre de 2003, El Mundo publicaba en primera página: «Agentes cancerígenos del Prestige, detectados en la cadena alimentaria». En la página 12 el lector encontraba una retahíla de términos ininteligibles, trufada de declaraciones oficiales que desmentían esos informes. El día siguiente los titulares de El Mundo eran: «Sanidad: No hay riesgo de consumir productos de Galicia» y «Arenas niega que haya algún accidente en la cadena alimentaria».<sup>[21]</sup> La estrategia parece clara, un día antes del aniversario, un diario próximo al gobierno se adelantaba a la presentación de un informe de la universidad de A Coruña, existente desde hacía medio año. El periódico aumentó las ventas, pero su anticipación impidió que el informe enturbiase la celebración del aniversario. La inundación posterior de declaraciones oficiales invalidó esos datos. Los únicos que, además, podrían resucitar el tema en la opinión pública.

El suministro de «exclusivas» alcanzó también a los medios más críticos en la cobertura del Prestige. También el 12 de noviembre resultaba sospechoso que El País, con una llamada en primera página, ocupase la página 12 con «Las imágenes que grabó Fomento» del remolque del petrolero. Sin contenido informativo alguno, ya que apenas se reconocían los personajes, esas fotos eran, sin embargo, una exclusiva difícil de rechazar. El mismo texto descubría su procedencia: «siguen siendo un secreto bien guardado en el Ministerio de Fomento». También anecdóticas, pero «exclusivas», fueron las imágenes del Nautilo que emitieron los telediarios de Tele 5 del mismo día 12 de noviembre. En suma, el gobierno privó de fuentes políticas, jurídicas y científicotécnicas a los medios, abriendo el flujo de las últimas a su antojo. La estrategia con los medios fue tan simbiótica (beneficiosa para ambos, a costa del conocimiento público) como coercitiva con la población.

Quedaban dos frentes por controlar: las mareas del fuel y de la ciudadanía. El gobierno se empleó en negar la primera y acosar a la segunda. Como vimos, la inminencia de las elecciones impidió una aproximación global: consensuar iniciativas en la Unión Europea, dinamizar y coordinar las iniciativas ciudadanas. NM y los voluntarios llevaron (y llevan) a cabo esas tareas casi en solitario. Incluso el Defensor del Pueblo señaló (aunque con tono atemperado) la manipulación informativa y la descoordinación del Ejecutivo.<sup>[22]</sup>

Los medios públicos (RTVE, RTVG) y los aliados mediáticos del gobierno (Antena 3, radios y diarios afines) transmitieron una imagen de normalidad a la que sólo se oponían «los radicales y los oportunistas». Los entes públicos difundieron mentiras de tal calibre, que sus reporteros debieron trabajar alejados de las zonas costeras para evitar ser agredidos. Los comités de empresa denunciaron manipulaciones, censuras y listas negras de profesionales.<sup>[23]</sup> Pero lo que contaba es que el gobierno inundó la esfera pública de comunicados. La minimización continua de las mareas negras («hilillos», «galletas», «lentejas» de fuel...) y la euforia por la limpieza de las playas («esplendorosas») mostradas por TVE, convirtieron el esclarecimiento de la verdad en una proeza. La prioridad periodística de citar fuentes institucionales aseguraba su visibilidad, incluso en los medios más críticos. Aunque luego fueran desmentidas en una esquizofrenia informativa sin parangón. Esquizofrenia entre la realidad y los telediarios gubernamentales, entre los telediarios de TVE y Tele 5, entre las versiones del PP y de NM...

Las sucesivas mareas negras no eran la invisible encefalopatía espungiforme, de ahí que Tragsa limpiase las rocas contaminadas con técnicas empleadas para eliminar pintadas; erradicando de paso toda la fauna y flora. Este proceder es también una metáfora. La limpieza cosmética del vertido (el grafiti negro que denunciaba al poder) alcanzó su cénit con la campaña institucional que convirtió el Nunca Más en Galicia Más que Nunca. Las playas del chapapote se transformaron en las idílicas panorámicas de la promoción turística Galicia Viva. Y la mayoría de los medios gallegos abandonaron su, hasta entonces, tono crítico, porque los aumentos por ventas eran menores que la publicidad institucional de la Xunta. Por esta vía también, incluso en los medios más hostiles, los mensajes oficiales seguían marcando la agenda «informativa».

El frente social desplegado por NM y los voluntarios era el más abierto, plural y dinámico. De ahí que se intentase desactivar con toda una batería de medidas. Para tejer la trama de subvenciones, se frenó la marea de voluntarios (y de sus testimonios). Se encargó su coordinación a sucesivas agencias, de creciente incompetencia y mala fe. A mediados de febrero la Xunta creó la Dirección General del Voluntariado, cuya principal misión fue disuadir la llegada de nuevos voluntarios.

Se desarrolló una política virtual. Las autoridades autonómicas abrieron una web [www.concienciasolidaria.org](http://www.concienciasolidaria.org) en la cual desinformaban sobre las mareas negras, negaban la necesidad de más voluntarios y teorizaban sobre la correcta práctica de la solidaridad. Proponían enviar donativos a la Fundación Arao, supuestamente encargada de «la recuperación ecológica». Un año después, ha sido incapaz de mostrar sus cuentas, tal como le solicitó NM.

Desde la web de Conciencia Solidaria se ofrecía un merchandising que incluía

gorras y camisetas con sus eslóganes. Su principal tarea fue elaborar un listado de todos los voluntarios que acudieron a Galicia para... enviarles el «diploma de voluntario». Mientras, la hostilidad institucional tocaba techo en la zona cero del desastre. Se prohibió la entrada a Muxía de varios autobuses de voluntarios catalanes, precisamente el icono del triunfo popular en las elecciones (también, por muy pocos votos). Forzados a colaborar en otros municipios que no eran del PP, interpusieron una demanda judicial al alcalde, que apenas trascendió. El progresivo descenso de voluntarios facilitó la contratación (a dedo y a cargo de la Fundación Arao) de empleados de la empresa pública Tragsa y de Protección Civil. Los jornales pagados en Galicia y el Cantábrico ascendieron a 1.208.226.<sup>[24]</sup>

Los voluntarios, enmarcados en un programa de intervención y educación medioambiental, habrían revitalizado la costa, también en términos económicos. Pero esa campaña tendría unos objetivos opuestos a los dibujados en los carteles de Galicia Viva. La solidaridad medioambiental evidenciaba la ausente Conciencia Solidaria de la Xunta. Los voluntarios movilizaban a la sociedad gallega, la Xunta intentaba convertirla en mediopensionista. Unos rompían las redes clientelares, mientras el gobierno gallego las retejía. La indiferencia mediática y política ante estos hechos explican el progresivo desaliento del voluntariado y el aguante electoral del PP.

Los voluntarios acabaron sufriendo la criminalización que Nunca Más sopor-tó desde su nacimiento. El fiscal General del Estado tramitó (en un solo día) una denuncia de fraude público porque el dinero recogido por la plataforma «no se destinaba a los afectados». Había sido presentada por el sindicato, Manos Limpias, sin apenas afiliados y dirigido por un líder de la ultraderecha. Fue voceada durante días por las televisiones gubernamentales y, en especial, por La Razón. La respuesta inmediata de las cofradías de NM y la adhesión de los sindicatos a la plataforma frenaron el ataque. En esa semana de enero NM recaudó cinco veces más dinero del que acostumbraba. Pero ha persistido un poso de desconfianza. Las acusaciones de provecho económico fueron seguidas por las de oportunismo político. Finalmente, el fantasma del nacionalismo secesionista fue invocado, ligado al terrorismo, y no a nivel de declaraciones. Al calor de las movilizaciones contra la guerra, el último fin de semana de marzo explosionaron dos cócteles molotov en sendas sedes del PP gallego. Era una acción sin precedentes, no reivindicada por ningún grupo y que, en el momento que se produjo desmovilizó conjuntamente las protestas por el chapapote y la guerra. Una guerra que el poder también libraba contra la sociedad civil.

El control de la crisis del Prestige se completó con el rechazo de la ayuda ofrecida a la Xunta por otros gobiernos. No aceptó un barco descontaminante que le ofrecía la Generalitat y apenas colaboró con otras autonomías para hacer frente al fuel. Mientras tanto, surgían plataformas NM en la costa cantábrica y los pescadores gallegos asistían a sus compañeros franceses ante la llegada de fuel a sus costas. A cambio, NM recibía aportaciones económicas de las cofradías galas. Los enfrentamientos políticos contrastaban con las iniciativas transnacionales de la sociedad civil, evidenciando la rigidez de las instituciones. Mientras éstas desarrollaban juegos de suma cero, los ciudadanos cooperaban más allá de las fronteras.

## Prietas las filas...

El ciclo de movilización finalizó porque las instituciones acabaron definiéndolo como antisistémico. No hubo una sola fisura en el búnker en el que el gobierno se había instalado. Este se impermeabilizó cerrando filas ante una oposición que inercialmente esgrimía la necesidad de consenso, cuando el disenso en la calle se manifestaba de forma evidente y las reacciones gubernamentales crecían en hostilidad.

El cierre de la esfera pública comenzó cuando la oposición cambió de bandera. Abandonó el «Nunca Más» por el «No a la Guerra», más abstracto y lejano. Por tanto, más dúctil y menos comprometedor.<sup>[25]</sup> PSOE e IU creyeron que tendría los efectos del «No a la Otan» de la década de 1980. Pero remitía a una reivindicación periclitada en el nuevo sistema internacional y recordaba la impotencia de la izquierda para haberla logrado en 1986. Es decir, los partidos menospreciaron el cambio de siglo y la memoria del electorado. El PP, en cambio, evocó la primera intervención extranjera con los reclutas de la mili (la Guerra del Golfo), la primera aplicación de unilateralismo (Kosovo)... De modo que no hizo falta profundizar en la inconsistencia de la oposición. El «No a la Guerra» tenía un alcance tan corto que fue recogido por el gobierno sin rubor. Voceado en casi cualquier foro, produjo saturación y sufrió la consiguiente banalización. Que la izquierda parlamentaria hubiese adoptado inercialmente este lema (surgido de la Plataforma de Cultura contra la Guerra), denota que ni era consciente de sus límites. Carecía de significado ante a un conflicto irreversible y, a corto plazo, sería desactivado por la toma virtual de Bagdad. Algo que el gobierno si aprovecharía.

J.M. Aznar capitalizó las críticas simplistas a su persona («autoritarismo», «pérdida del sentido de la realidad» y «complejo de inferioridad»), sabedor de que no concurría a las elecciones y que presentaría a su sucesor investido de «tolerancia» y «capacidad negociadora». El Presidente comenzó la campaña electoral con dos apariciones claves. La primera, fue la reunión en Londres con T. Blair para celebrar la toma de Bagdad frente a un partido de fútbol televisado. En su siguiente comparecencia internacional, de la mano de G.W. Bush, dio el anuncio (postergado hasta entonces) de la inclusión de la izquierda abertzale entre los objetivos de la guerra contra el terrorismo. La oposición quedó, otra vez, arrinconada con la equi-valencia «pacifistas = (amigos de) terroristas». ¿Cómo negar ahora que «todo terrorismo es lo mismo» (en Euskadi, en Palestina o en Manhattan) y desandar el frentismo del «conmigo o contra mí» en el País Vasco?

La Guerra Global Permanente contra el Terrorismo no fue cuestionada y quedaron al margen del debate las reivindicaciones pacifistas. Medidas locales, como la reconversión de la industria bélica en los municipios de izquierda, no fueron siquiera planteadas. Tampoco pudo plantearse la imprescindible vinculación entre cooperación internacional y racionalización de los flujos migratorios ante el uso electoral del Consejo de Ministros, dedicado a endurecer la ley de extranjería en la última semana de campaña. Y, de igual modo, el encorsetamiento en el mismo discurso económico, impedía a la izquierda parlamentaria contrarrestar las rebajas fiscales decretadas por el Ejecutivo antes de las elecciones. Frente al antibelicismo, el PP empleó los

mismos recursos de bunkerización que hemos visto aplicados al chapapote. No hubo comisiones parlamentarias, ni fisura alguna en el gobierno, ni investigaciones judiciales de las decisiones del Ejecutivo, ni retractación de los «expertos» en armas de destrucción masiva, ni posibilidad de filtrar las imágenes de la devastación de Iraq, ni...

Esta breve digresión sobre la desactivación electoral de la guerra muestra cómo la esfera pública española se convierte en mero espacio de contienda partidaria y, peor aún, esta contienda se salda enfrentando a los gobernantes y la sociedad civil. La estrategia del «Yo o el caos», enunciada por todos los Presidentes de gobierno desde la transición es un legado de la dictadura. La oposición política o la movilización social en momentos de crisis, en lugar de ser fenómenos lógicos y asumibles por la democracia, se consideran «deslealtad» o «subversión». El calado de este discurso en la ciudadanía responde a un franquismo sociológico más persistente de lo que se quiere reconocer.

Sorprende la facilidad con la que el gobierno denunció «la politización» de las dos crisis. En lugar de reconocerla como la vía constitucional para negociar los conflictos, afirmó (como hacía el dictador) que los partidos creaban «enfrentamiento» (el espectro de la guerra civil) y «crispación» (el término socialista, heredado por el PP). Encausar judicialmente a una plataforma cívica por recoger dinero para la protesta supone negarle los recursos para su autonomía política, precisamente aquello de lo que se acusó a NM. Y revela que practicar el asistencialismo está mejor visto que exigir un Estado de Bienestar. La expulsión de los voluntarios desveló la hostilidad hacia la colaboración ciudadana que va más allá de la «solidaridad» descomprometida. Y, cuando el gobierno afirmaba la manipulación de los manifestantes, suponía su minoría de edad. Resurgió así el supuesto clave de las elites que pilotaron la transición: recelar de toda movilización y, en caso de producirse y no poder canalizarla, calificarla de antisistema.

Como afirmaban dos actuales cargos del PP hace años: «[La persistencia del consenso y de los vetos de la transición] producen una auténtica crisis en la función de los partidos políticos que, de ser vehículos de catalización de iniciativas o instituciones mediadoras entre el Estado y la sociedad, se ven continuamente desbordados o «puenteados» por la sociedad a la que cada vez más son incapaces de representar en su conflictividad».<sup>[26]</sup> En buena lógica, la protesta se afrontó con querrelas judiciales y violencia policial. Esta respuesta, casi guerracivilista, se completaba con la acusación de «electoralismo» de la oposición, obviando que las urnas son el único camino admisible para llegar al gobierno.

Por último, los ataques a NM señalan el empobrecimiento del debate público en España cuando la «politización» se tiñe de nacionalismo no españolista. Indignan las llamadas a la «cohesión nacional» (de hecho, cierre de filas) que han hecho todos los gobiernos frente a crisis del calado de las que hemos analizado. La indignación aumenta cuando se observa la cohesión social, dentro y fuera de las fronteras, demostrada con los hechos, con los cuerpos que se enfrentaron al chapapote o se manifestaron contra la guerra. En tiempos del PSOE las intervenciones bélicas y la guerra sucia antiterrorista

fueron esgrimidas como «asuntos de Estado», merecedoras de «consenso». Con el PP fueron moneda corriente las declaraciones que equiparaban la lucha contra ETA y Al Qaeda, «bataunizando» de paso a NM. En el momento de escribir estas páginas, tiene lugar el primer debate parlamentario sobre militares españoles muertos en Iraq. El presidente Aznar declara que «la lucha contra el terrorismo no se hace sólo en territorio nacional, sino también en aquella zona del mundo». Cuando el mismo día, la juez archiva definitivamente la denuncia de los familiares de los 62 soldados muertos en el Yak42, el candidato socialista responde: «Usted y yo podríamos y deberíamos entendernos». Y el presidente replica: «Queremos que las apelaciones al consenso sean serias, firmes y se mantengan».<sup>[27]</sup>

La continuidad de la retórica gubernamental y la inanidad de la oposición resultan pasmosas. El antiterrorismo se asume como única política para afrontar, a nivel global, «el choque de culturas» y, a nivel estatal, para frenar «la guerra civil del nacionalismo étnico». Este discurso se retroalimenta cada vez que se enuncia y que se pone en práctica. El miedo al paro o a la emigración por los efectos del Prestige es paliado con subvenciones mordaza. El miedo al extranjero (de dentro o fuera de las fronteras) se combate con violencia legal y bélica. Pero este proceder revela, ante todo, impotencia para afrontar los retos políticos más urgentes y, a fin de cuentas, busca la desmovilización. Porque, como afirma la teoría de la opinión pública, el miedo desata «espirales de silencio y de mentiras prudentes».<sup>[28]</sup> Quizás esto ayude a explicar la persistencia del búnker y por qué la marea humana no logró rebasar el dique electoral.

**[1] Profesor titular de Opinión Pública, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.**

**[2] Esta es una estimación conservadora. Un impreso oficial del municipio, señala que en Carnota habían llegado unos 90.000 voluntarios hasta abril de 2003. A Muxía, Fisterra o Camariñas pudieron llegar otros tantos o más. Los municipios menos afectados de la ría de Vigo acogieron a**

**[3] Una breve enumeración de convocatorias es la siguiente: 200.000 300.000 manifestantes en Santiago el 3 de diciembre; 100.000 en A Coruña el día de los Santos Inocentes en «El funeral del mar». Otros tantos en Vigo en «La cabalgata de los Reyes Magos». Posterior protesta en el puerto de A Coruña, que quedó repleto de «maletas de emigrantes». 300.000 400.000 manifestantes en la convocatoria estatal del 23F de 2003 en Madrid. Antroido (carnaval) con atuendos de caza en las ciudades y pueblos gallegos. 50.000 escolares en A Costa da Morte...**

**El 15 de febrero se habían manifestado unos dos millones de personas en Madrid contra la guerra. Se produjeron simultáneamente concentraciones multitudinarias en todas las capitales de provincia y la mayoría de los pueblos de España. Con el estallido del conflicto, las movilizaciones madrileñas durante el mes de abril crecen hasta sobrepasar la barrera de los 100.000. Autorizadas todas el día previo, con una presión policial creciente, las concentraciones ignoraron los recorridos legalizados. Las multitudes se dirigieron espontáneamente al Congreso de los diputados, la sede del PP y la embajada norteamericana. Las fuerzas del orden comenzaron a realizar provocaciones y cargas. La tensión alcanzó su punto álgido en la concentración del sábado 24, cuando 300.000 madrileños se concentraron en Moncloa con la intención de marchar sobre la residencia del presidente de gobierno, sin permiso administrativo. Cambiado el recorrido a última hora, las cargas policiales se desataron en la calle Montera. Los últimos manifestantes impidieron a las fuerzas policiales entrar en la Puerta del Sol. En los días siguientes, los**



partidos y sindicatos del Foro Social de Madrid y la Plataforma contra la Guerra realizaron convocatorias fuera de la capital y acabaron de desmovilizar a la ciudadanía instándola a realizar una (¡segunda!) Marcha a Torrejón y a asistir a un concierto en el que participaba, entre otros, Ana Belén (protagonista de un primer video electoral de Alberto Ruiz Gallardón). La «toma» de Bagdad pondría fin a las convocatorias de los partidos contra la guerra y la campaña electoral, a las de Nunca Más.

[4] Para un resumen de la imbricación en el Prestige de las mafias transnacionales del petróleo, el tráfico de armas y las altas esferas políticas y económicas de España, véase [http://trama\\_Prestige.cjb.net](http://trama_Prestige.cjb.net) o . Y, sobre todo, el primer libro de investigación sobre este asunto, Gortázar, Iban (2003) Los piratas del Prestige. De la Casa Blanca a la Zarzuela. Bilbao: Liburuak.

[5] Ezequiel Navío Vasseur. WW Adena. «PPrestige». La Opinión, Especial, 13XI2003, p.10

[6] La Voz de Galicia, 13112003, p. 23.

[7] Idem, pp. 14.

[8] El País Semanal, 1632003, p. 58.

[9] En este sentido pueden resultar significativos los intentos en Madrid de organizar la movilización en torno a NM. Quien esto escribe actuó en un grupo de afinidad llamado «Marea Humana», convocante con apenas tres organizaciones ( BNG, Ecologistas en Acción y Espacio Alternativo) de la primera manifestación en la capital, el 13 de diciembre. Los activistas antiglobalización apenas recogieron el tema e, incluso, algún colectivo lanzó argumentos deslegitimadores como la manipulación nacionalista o la instrumentación estatal del voluntariado. Con algunas excepciones muy notables (nodo50, Ecologistas en Acción, El Centro Social El Laboratorio y algún otro grupo de base) el tejido social madrileño no demostró apoyos ni autonomía suficientes para montar una Plataforma Nunca Más en Madrid, sin que cayese en manos de los partidos y sindicatos. La primera propuesta en este sentido partió de afiliados y miembros del PSOE e IU que, junto algunos delegados sindicales, intentaron a mediados de enero (i) autodenominarse Nunca Más Madrid, con la única intención de organizar una manifestación. No tenían contactos previos con NM. Excepto varios conciertos, no habían organizado ningún evento previo. Su urgencia por convocar una manifestación en Madrid, aceleró la convocatoria de NM para el 23F. Posteriormente abandonaron la bandera de NM, por la de «No a la Guerra».

[10] El cuadro adjunto detalla los votos y escaños del Parlamento gallego actual (el emanado de las últimas elecciones autonómicas de 2001) y el que saldría de unas elecciones en las que los tres partidos con representación parlamentaria obtuviesen idéntico resultado al de las últimas elecciones municipales. La proyección de escaños sólo tiene en cuenta los votos de los tres partidos con representación parlamentaria en la actualidad, excluyendo el muy improbable escenario de que un cuarto partido consiguiese entrar en la cámara autonómica.

#### AUTONÓMICAS 2001 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

Votos	Escaños	Votos	Escaños	Votos	Escaños	Votos	Escaños
PP 29.6734	12	124.042	9	121.073	8	250.036	12
BNG 14.6816	6	43.245	3	42.780	3	113.582	5
PSOE 13.9662	6	47.838	3	40.695	3	106.624	5

#### MUNICIPALES 2003 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

Votos	Escaños	Votos	Escaños	Votos	Escaños	Votos	Escaños
PP 24.2321	11	116.401	8	118.279	8	218.539	10
BNG 12.7024	5	34.464	2	39.733	3	124.271	6
PSOE 19.3748	8	76.897	5	50.840	3	130.971	6

Elaboración: Xabier Meilán Pita.

[11] Véase, Crespo, Ismael. 2004. Las campañas electorales y sus efectos en el voto. Valencia: Tirant Lo Blanc.

[12] Tras tensiones con los compañeros del BNG y Galiza Nova de Marea Humana, este colectivo logró hacer llegar a NM una propuesta de convocatoria para la manifestación del 23F, en línea con las movilizaciones antiglobalización. La estéril disputa sobre la visibilidad de los partidos intentaba zanjarse asegurando la cabecera a los sectores afectados, seguidos de una columna de todos los que habían acudido como voluntarios, vestidos con monos blancos. Al resto de los manifestantes se les rogaba asistir de riguroso luto y, en último lugar, vendrían las formaciones políticas y sindicales. La Comisión Gestora de NM no dio siquiera acuse de recibo de la propuesta y las tensiones por esta cuestión en Marea Humana acarrearían su autodisolución a la altura de junio.

[13] El País, Domingo, 19/12/2003, p. 7.

[14] El Conselleiro de Pesca, E. López Veiga, no confirmaba este porcentaje, pero señalaba que la reconversión del sector era imprescindible, porque «en el mar no caben todos». El País, Domingo, 1-9/2003, p. 50.

[15] «La marea sigue. Prestige: un año después. Evaluación ambiental y socioeconómica». Informe de WWF/Adena, noviembre 2003, p. 3.

[16] Datos del equipo de biología pesquera de la Universidade de A Coruña, tomados entre enero y marzo de 2003, que Marea Humana intentó hacer públicos en la última semana de la campaña electoral. Ninguna fuente académica, partidista o del sector quiso pasarnos el informe; que, no sería publicado por la prensa hasta el 13 de noviembre. La coacción administrativa (incluso con la amenaza de la retirada de las licencias de pesca) y los intereses electorales impidieron publicitar dicho informe. Este señala la presencia de niveles elevados de HAP (altamente cancerígenos) en especies sedentarias (bivalvos, percebes y erizos) que se encuentran en la base de la cadena trófica y tienen poca capacidad de degradar estos compuestos. Los HAP están también presentes en peces, crustáceos decápodos o cefalópodos en concentraciones menores pero elevadas. Ibid. P. 11.

[17] La Opinión. Especial, 13/12/2003., p.7.

[18] La imputación es de la American Bureau of Shipping, que certificó la navegabilidad del buque. La defensa del gobierno español corre a cargo del despacho de abogados Holland & Knight, contri-buyente de la campaña de Jeb Bush, hermano del presidente de EE UU, para ser reelegido gobernador de Florida. La Opinión, Especial. 13/12/2003., p.4.

[19] La Voz de Galicia, 13/12/2003, p.7.

[20] Véase la nota a pie de página nº 15. Revítese también el primer libro «académico» sobre el Prestige, coordinado por Cabrera Varela, J. y GarcíaAllut (2003) ¿Qué foi do Prestige? Santiago de Compostela: Sotelo Branco.

[21] El Mundo, 13/12/2003, p. 8.

[22] El País, 19/12/2003, pp.23 y 24.

[23] Véase, por ejemplo, el «Comunicado del Comité General de Intercentros de RTVE», Madrid, 13 de diciembre de 2002; seguido de otros sobre la invasión de Iraq.

[24] La Voz de Galicia, 13/12/2003, p. 23.

[25] Ejemplo de ello fue la invitación que el autor recibió de la Diputación de Sevilla para coordinar una mesa redonda. Fueron convocados, además, dos miembros de NM, el presidente de Voluntarios sin Fronteras y un asesor del PSdG. No hubo publicidad alguna y los cargos del PSOE no hicieron acto de presencia. Estaban de campaña

municipal, y ya sólo esgrimían el «No a la Guerra». El acto, que debía celebrarse el 28 de marzo en el marco de conferencias del Premio Tomás y Valiente fue suspendido. Ni siquiera se había previsto nuestra intervención en los medios locales.

[26] Se ha cumplido, por tanto, casi a rajatabla la advertencia que R. del Aguila y R. Montoro hacían en su libro de El discurso de la transición española. CISS.XXI, Madrid, 1984, p. 251.

[27] El País, 3122003, pp. 17, 18 y 22.

[28] Véase la exposición de las teorías de la «espiral del silencio» (NoelleNeumann) y de «la mentira prudente» (T. Kuran) en Víctor Sampedro, 2000, Opinión pública y democracia deliberativa. Madrid: Istmo, pp. 100107 y 142152.